



Se está construyendo un país con trabajadores de primera y de segunda: quienes tienen palanca política y quienes asumen las cargas del sistema.



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

Privilegiados

El pasado 6 de febrero, la presidenta Sheinbaum presentó una reforma sensata a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): que los trabajadores con ingresos mensuales superiores a 34 mil pesos aportaran recursos al seguro de salud del ISSSTE con base en su salario integrado, no solo sobre su sueldo base. La intención era recaudar más de 11 mil millones de pesos al año y fortalecer las finanzas del Instituto. (El déficit del seguro de salud superará los 488 mil millones de pesos en los próximos 20 años).

Pero la propuesta duró poco. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) respondió con protestas masivas en febrero, un paro nacional de tres días en marzo y exigencias políticas. La Presidenta cedió: retiró la iniciativa antes de que siquiera se discutiera. No solo eso. Para calmar al magisterio, el gobierno decretó reducir, congelar o incluso condonar

las deudas hipotecarias que miles de maestros y otros trabajadores del Estado tienen con el Fondo de la Vivienda, el llamado Fovissste.

¿Está mal apoyar a los trabajadores que enfrentan deudas impagables? No. Lo preocupante es que este tipo de apoyos se implementen sin un diseño financiero sólido que garantice su viabilidad en el largo plazo. Y que solo se apoye a quienes tienen fuerza de presión política.

Este no es un caso aislado. En 2020, Manuel Bartlett, entonces director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), renegó el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado en 2016 con los trabajadores electricistas (SUTERM) con el que aumentó la edad de retiro de 55 a 65 años para los trabajadores de nuevo ingreso, tal como es la práctica de la pensión de vejez en el IMSS o de quienes trabajan en empresas y otros sectores de la economía. Esta medida formó parte de una estrategia integral de viabilidad

financiera para la empresa derivada de la reforma energética de 2013.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador dio marcha atrás en 2020 sin que mediara una justificación ni tampoco protestas masivas.

Los trabajadores de la industria eléctrica hoy pueden retirarse a los 55 años, como antes de la negociación de 2016, con beneficios plenos. En México, la esperanza de vida de los hombres ha pasado de 59 años en 1970 a 74 años en años recientes, pero los trabajadores del sindicato electricista tienen privilegios del siglo XX.

Según México Evalúa, el pasivo laboral de la CFE era de 466 mil millones de pesos en 2020; con la reducción de la edad de retiro ese pasivo aumentó 48 mil millones al cierre de ese año. Ese mismo año, los costos relacionados con obligaciones laborales se dispararon a 127 mil millones de pesos, un incremento del 236% en comparación con años anteriores.



Con los maestros ocurrió algo parecido. El gobierno frenó el incremento en la edad de retiro, que se quedará en 58 años para hombres y 56 para mujeres. Aunque suena bien en términos de derechos laborales, esta decisión significa más años cobrando pensión, menos años cotizando y, al final, más presión sobre el presupuesto público. Solo en 2025, el gasto en pensiones significa casi el 18% del presupuesto y sigue creciendo.

Nadie discute que mejorar las condiciones laborales sea deseable. Qué bueno que haya aumentos de salario y mejores pensiones. El problema es que estos avances solo llegan a quienes pueden negociar colectivamente o bloquear calles. ¿Y el resto? ¿Y los trabajadores independientes, los del sector privado, los jóvenes sin plaza?

Así se está construyendo un país con trabajadores de primera y de segunda. Con privilegios concentrados en quienes tienen palanca política, mientras el resto asume las cargas del sistema. La equidad no consiste en dar más al que más grita, sino en establecer reglas justas para todos. Si el Estado solo escucha a los poderosos, no estamos ante un proyecto de justicia social, sino frente a una política clientelar.

Y lo más grave es que, si seguimos por este camino, el sistema no va a aguantar. Y cuando colapse, no serán los sindicatos los que paguen la cuenta. Seremos todos.